



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, febrero 2 de 2022

Radicado: 05001 31 05-003-2018-00373-01
Demandante: JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA
Demandado: PROTECCIÓN.
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA.
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

El accionante instauró proceso ordinario en contra PROTECCIÓN pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de padre del señor DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA, junto con los intereses moratorios y la indexación.

Para respaldar sus pretensiones, indicó que su hijo DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA falleció el 20 de octubre de 2013 fecha para la cual estaba afiliado a PROTECCIÓN, que su hijo Daniel era quien le ayudaba económicamente, toda vez que el único ingreso que tenía para la fecha de su fallecimiento era por las ventas de

chance las cuales eran insuficiente para solventar todos sus gastos. Dijo que, en razón del fallecimiento de Daniel, él y su cónyuge en calidad de padres reclamaron ante Protección el reconocimiento y pago de la pensión, solicitud que fue resuelta de forma negativa aduciendo que no se encontraba acreditada la dependencia del padre respecto del causante.

Que DANIEL su hijo y su esposa CONSUELO TABORDA eran quienes sufragaban en mayor parte los gastos del hogar, pues eran quienes contaban con un ingreso estable, mientras que el actor se dedicaba a la venta de chance y era su hijo quien le colaboraba para sus gastos personales.

El *A quo* consideró que, con la prueba recaudada dentro del proceso, especialmente la testimonial no era posible advertir que el causante aportara ingresos significantes en favor de su padre, ya que ninguno fue capaz de establecer el valor del aporte de Daniel para la manutención del accionante, ni aproximar los gastos del hogar, en consecuencia, absolvió de todas las pretensiones elevadas.

Decisión que fue recurrida **por la parte accionante** quien resaltó que los testigos fueron claros en declarar que el hijo le brindaba ayuda económica y permanentemente, que si bien su dependencia no era total si era significativa para sus gastos y del hogar en general. Que siempre ha trabajado vendiendo chance y sus ingresos han sido pocos y variables, razón por la cual el aporte que daba su hijo era relevante y necesario.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la parte activa presentó alegatos de conclusión ratificándose en los argumentos expuestos en la presentación del recurso e insistiendo que los ingresos que obtiene a causa de la venta de chance no son suficientes para sufragar los gastos necesarios para su vida y que el estipendio que entregaba su hijo mensualmente para su manutención ayudaban a garantizarle el mínimo vital y la vida digna.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que en el presente proceso se encuentra probado que: **1)** DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA nació el 19 de octubre de 1988 y falleció el 20 de octubre de 2013 (pag.19 y 20). **2)** Que PROTECCIÓN respondió de forma negativa la solicitud realizada por el demandante para el reconocimiento de la prestación que solicita con la demanda (pág. 13 y 14). **3)** Que en declaración extrajuicio realizada por la señora MARÍA CONSUELO TABORDA en calidad de madre del causante, indico que no reclamaría pensión de sobreviviente como beneficiaria de su hijo, comoquiera que no dependía de éste. **4)** Que de conformidad con la respuesta dada por Protección el 11 de diciembre de 2014, el causante tenía en los 3 años anteriores a su fallecimiento un total de 81.42 semanas (pág. 103).

En ese orden de ideas, en esta instancia se discute si el señor JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA es beneficiario de la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de su hijo DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA y si es procedente la condena en intereses moratorios.

Habiendo fallecido el señor DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA el 20 de octubre de 2013, la norma que gobierna el presente caso es la ley 797 de 2003, la cual en el artículo 12 numeral 2.º establece que para que el grupo familiar del causante puedan ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente es necesario que:

- 1- Se acrediten al menos 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento **(no se discute)**.
- 2- Y tratándose de los padres, acreditar la dependencia económica. (en discusión).

Sobre la dependencia económica de los padres que reclaman la prestación de sobreviviente, la H. Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006 del 22 de febrero de 2006, expresó, que “si bien la pensión de sobrevivientes representa para quien ha perdido a aquella persona que le proporcionaba los elementos necesarios

para lograr una vida digna, la posibilidad de salvaguardar su derecho al mínimo vital, **resulta contrario a la Constitución que el criterio de la dependencia económica, como condición sine qua non para que los padres puedan reclamar el reconocimiento y pago del citado derecho prestacional a partir de la muerte de su hijo, se circunscriba a la carencia absoluta y total de ingresos (indigencia),** cuando la existencia de asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra prestación de la que son titulares, les resulta insuficiente para lograr su autosostenimiento”. (Negrillas fuera de texto).

En dicha providencia se establecieron reglas para identificar el “mínimo vital cualificado” del cual se pueden advertir las condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos:

1. “Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”.

La H. Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos, indicando por ejemplo en sentencia SL1913 del 22 de mayo de 2019 Radicación n.º 74074:

*Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha establecido que la dependencia económica a que alude el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 no puede comprenderse en términos absolutos, **de modo tal que el hecho de que los padres del afiliado fallecido perciban otras contribuciones o rentas, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes**, a condición de que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas dignas y decorosas (CSJ SL 31346, 12 feb 2008, reiterada en la SL2800-2014 y la SL6558-2017).*

Ahora, como bien lo alude la recurrente, la Sala también ha enseñado que el hecho de que la dependencia no deba ser total y absoluta, «(...) no significa que cualquier estipendio que se les otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas» (CSJ SL4811-2014).
(...)

Descendiendo al caso en concreto, tenemos que, en audiencia de trámite se recibieron los siguientes testimonios:

El testigo **Omar de Jesús Ángel Duque** (min. 31:00), indicó conocer al señor José Luis hace 25 años aproximadamente al ser vecinos pues vivían en la misma cuadra, se consideran muy cercanos y buenos amigos, también dijo conocer a la señora Consuelo esposa de José Luis y a sus hermanos.

Conoció a Daniel Fernando desde que era niño, y a su grupo familiar, hermanos Luis Eduardo, Alejandro y Carolina, indica que eran 5 hermanos, no recuerda la fecha de muerte, pero reconoce que Daniel Fernando trabajaba en la empresa Segurcol con el señor Luis Carlos Parra, empresa a la que estaba vinculado al momento de su muerte. Refiere que Daniel Fernando no tenía hijos ni compañera permanente.

Indicó que el señor José Luis y la señora Consuelo se encontraban empleados cuando falleció Daniel Fernando, él como vendedor ambulante de chance y ella trabajaba en el hospital.

No tiene conocimiento del valor total de los gastos, ni el salario devengado por Daniel Fernando, pero fue testigo de los aportes que hacía a la economía del hogar. Aportes que asegura eran fijos y constantes.

Aseguró que el señor José no tenía ingresos fijos propios, ya que dependía de la venta o no del chance. Con la señora Consuelo refiere que sus ingresos eran fijos y su labor era continua. Le consta que Daniel Fernando daba dinero a su padre José Luis para sus gastos propios “era un segundo padre en la casa”.

No sabe quién de los hermanos es el mayor, no conoce exactamente las edades, pero refiere que quién llevaba la responsabilidad era Daniel Fernando, los demás hermanos según recuerda estaban en el colegio. No sabe con exactitud los horarios de trabajo de la señora Consuelo, con el señor José Luis indica que salía a realizar su labor de venta de chance a las 7am, regresando a casa en horas de la tarde.

Se enteró del acontecimiento de la muerte de Daniel Fernando sin mayores detalles. No tiene conocimiento acerca de deudas o préstamos de Daniel Fernando. Indicó que Daniel Fernando en ocasiones se transportaba a su lugar de trabajo en transporte público, o con un compañero en moto. Recuerda que el día del acontecimiento con Daniel se encontraba en su día de descanso.

El testigo **Bleat María Holguín Puerta** (min: 21:15), conoció al señor José Luis por medio de su esposa con quién trabaja desde hace 16 - 17 años. Conoció también a Daniel Fernando y a los demás hijos de la pareja. Dijo que Daniel Fernando vivía con su familia y no tenía hijos ni pareja permanente. A la fecha de la muerte de Daniel Fernando el señor José Luis se encontraba trabajando en su oficio del chance. Visitaba esporádicamente la casa de la pareja (vacaciones o fechas especiales), ya que ha vivido en Medellín. Reconoció que Daniel Fernando era el mayor de los hijos

y ayudaba económicamente a su familia. Desconoce el valor de los gastos del hogar y el valor de la ayuda que daba Daniel Fernando a su familia.

Que los ingresos del señor José Luis eran producto de su actividad de venta de chance. Dijo que Daniel Fernando era el hijo mayor, le seguía en edad Carolina, Alejandro y Luis Eduardo como el menor de los hijos de la pareja, quienes vivían junto a sus padres en la misma casa. Recordó que Daniel Fernando se desempeñaba en labores de seguridad y que el día del fallecimiento de Daniel era un día no laboral, festivo.

La testigo **María Lilia Giraldo Pérez** (min. 00:35:35), dijo que conoció al señor José Luis hace 30/35 años, en pueblo (Argelia), a su esposa Consuelo y sus hijos.

Que el fallecimiento de Daniel Fernando ocurrió el 20 de octubre de 2013. Que para esa época el padre era vendedor de chance, indicó no tener conocimiento acerca del monto de los gastos mensuales del señor José Luis, que los gastos del hogar eran atendidos por los padres y Daniel Fernando, que no sabe la cantidad aportada por Daniel para los gastos, pero dijo que la regularidad era quincenal. Relató que Daniel Fernando vivió entre 2010 y 2011 en Medellín en habitación arrendada por la señora María Lilia y posteriormente regresó a casa de sus padres en Amagá. Recordó que la muerte de Daniel Fernando sucedió un domingo.

La Sala además considera relevante traer a colación la declaración del demandante, ya que, si bien no existió prueba de confesión en su declaración, los dichos de este sirven para otorgar o restar credibilidad a lo manifestado por los testigos.

Manifestó el señor **José Luis Loaiza Zuluaga** (min 07:54), que la causa de muerte de su hijo Daniel Fernando Loaiza fue asesinato ocurrido en Amagá el 20 de octubre de 2013, se encontraba en su día de descanso al momento de los hechos, estaba vinculado a una empresa de vigilancia con sede en Medellín, pero prestaba su servicio en Amagá. Su núcleo familiar estaba constituido en el año 2013 por: Consuelo Taborda (esposa), y sus hijos Luis Eduardo Loaiza Taborda, María José

Loaiza Taborda, Carolina Isabel Loaiza Taborda, José Luis Loaiza Taborda. Manifiesta que los gastos del hogar para el año 2013 eran divididos entre los integrantes del núcleo familiar que se encontraban trabajando para ese momento: Consuelo (era quien más aportaba a los gastos del hogar), Daniel Fernando (\$150.000 quincenales aproximadamente), y el señor José Luis aportando desde su actividad como vendedor de chance (\$250.000 mensual). No tiene claridad cuál era el valor total de los gastos mensuales en el hogar (pero los aproximó en \$450.000 arriendo, \$300.000 a \$400.000, \$150.000 servicios públicos). Manifestó que su hijo Daniel Fernando no tenía deudas y que tenía un promedio de gastos personales de \$100.000 a \$150.000.

Analizadas las pruebas en conjunto y contrario a la conclusión arribada por el A Quo, para esta Sala es posible dar por acreditada la dependencia económica del señor JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA respecto de su hijo DANIEL FERNANDO LOAIZA TABORDA, pues del interrogatorio de parte y la prueba testimonial practicada es posible advertirlo de una forma holística, así el Juez de instancia echó de menos que los testigos no dieran una cifra exacta de ingreso aportado por Daniel para su padre, desechando por completo que al unísono indicaron que le entregaba dinero cada 15 días toda vez que los ingresos del padre eran aleatorios e insuficientes en tanto su labor siempre ha sido informal y fluctuante como vendedor de chance.

En consecuencia, PROTECCIÓN deberá reconocer y pagar pensión de sobreviviente al señor JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA causada a partir del 20 de agosto de 2013 fecha del fallecimiento de su hijo DANIEL FERNANDO LOAIZA.

Ahora, respecto de la excepción de prescripción se tiene que PROTECCIÓN a través de respuesta del 23 de enero de 2015 resolvió el recurso de consideración, por lo tanto, tenía hasta el mismo día y mes del 2018 para presentar demanda, y como lo hizo el 3 de julio de 2018 (pág.9), se declaran prescritas las mesadas pensionales generada con anterioridad al 3 de julio de 2015. Declarándose así probada parcialmente la excepción de prescripción.

No se realizarán los cálculos concernientes a la liquidación de la prestación que se reconoce, por cuanto con la demanda ni con la contestación de la demanda se aportó la historia laboral del causante y por lo tanto se desconoce el IBL por el cual hizo aportes.

Así las cosas, corresponderá a Protección realizar el cálculo de la prestación, aplicando las reglas de los artículos 21, 48 y 76 de la Ley 100 a razón de 13 mesadas anuales. De igual se autoriza a PROTECCIÓN a realizar los descuentos que por salud corresponden.

INTERESES MORATORIOS.

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 que, tratándose de la pensión de sobreviviente en el RPM, y después de radicada la solicitud con la correspondiente documentación que acredite el derecho, el fondo cuenta con 2 meses para reconocer la pensión de sobreviviente, y en caso de que supere dicho límite deberá reconocer interés a la tasa máxima.

En ese sentido, al haberse radicado solicitud de pensión de sobreviviente el 9 de enero de 2014, la entidad debía reconocer la prestación a más tardar el 10 de enero de la misma anualidad y como no lo hizo son procedentes los intereses reclamados, máxime que desde que se radicó la solicitud se explicó la informalidad de la labor desempeñada por el accionante, la fluctuación de sus ingresos y el apoyo económico que percibía de su hijo, quedando así demostrado el requisito de la dependencia económica que se exige para el acceso a la prestación, por tanto la negativa de la prestación obedeció a la desidia de la entidad.

No obstante, comoquiera que se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, los intereses moratorios también se entenderán prescritos con anterioridad al 3 de julio de 2015, siendo este su hito inicial y correrán hasta la satisfacción del retroactivo pensional.

Finalmente, de conformidad con la excepción de compensación propuesta por PROTECCIÓN y comoquiera que se encuentra acreditado que el actor recibió por concepto de devolución de saldos en calidad de padre del causante la suma de \$2.591.055 (pág. 107), el 11 de marzo de 2015, se declarará prospera parcialmente la excepción de compensación, permitiendo que la demandada al momento de realizar el pago del retroactivo aquí ordenado descuente los valores a este pagados autorizando la indexación de este concepto a la fecha del cálculo.

Costas en ambas instancias a cargo de PROTECCIÓN, se fijan en esta instancia en la suma de 5 SMMLV

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA** la decisión tomada en primera instancia y en su lugar se ordena a PROTECCIÓN a reconocer y pagar al demandante pensión de sobreviviente en favor de JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA desde el 20 de octubre de 2013, pensión que deberá calcular la entidad al momento del pago y reconocerse con 13 mesadas anuales, se condena igualmente a reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción y con ello prescritas las mesadas pensionales e intereses causados con anterioridad al 3 de julio de 2015; y probada parcialmente la excepción de compensación. Se autoriza a Protección a realizar los descuentos en salud.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

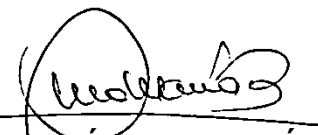
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-009-2018-00373-01
Demandante: JOSÉ LUIS LOAIZA ZULUAGA
Demandado: PROTECCIÓN.
Decisión: REVOCA

Magistrado ponente: DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 9 de febrero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO